

SINDICATOS, EMPRESARIOS Y GOBIERNO

EN palabras de su presidente, Antonio Garrigues Walker, nunca había asistido tanta gente a un acto organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección. Efectivamente, la gran sala de reuniones del hotel Palace se encontraba abarrotada por 1.100 empresarios grandes, medianos y pequeños que habían acudido para escuchar a las tres principales centrales sindicales —USO, CC. OO. y UGT—. Algunos de los directivos incluso se habían desplazado desde Barcelona, Bilbao, Valencia o Sevilla, y tanto la prensa, radio y televisión no pararon de realizar breves entrevistas a unos u otros de los protagonistas. El ambiente era, pues, de franca expectación, pues las circunstancias generales del país habían cambiado sustancialmente con respecto a aquel otro encuentro del 76 en el Euroforum, cuando todavía no estaban legalizadas ni las centrales, ni los partidos, ni se habían celebrado las elecciones del 15 de junio. Como comentó un alto ejecutivo de la Banca, la elaboración de la nueva Constitución será un acontecimiento muy importante, pero donde está el problema de fondo es aquí en esta sala, en las futuras relaciones entre los empresarios y los trabajadores. Sin duda el 25-30 por ciento de inflación, el millón de parados, el creciente déficit de la balanza comercial y de pagos, la descapitalización y atonía de las inversiones, las suspensiones de pagos y quiebras planeaban sobre empresarios y centrales sindicales al igual que sobre todo el país, enmarcando un encuentro que se daba en libertad —“hace sólo unos meses muchos de ustedes no hubieran venido y algunos de nosotros tampoco, porque estábamos en la cárcel”, señaló Camacho levantando aplausos—, pero en un momento de profunda crisis económica. El propio Gobierno, o por lo menos su equipo económico, era consciente de la importancia de esta reunión y se rumoreó que el mismo superministro de economía, profesor Fuentes Quintana, había enviado un observador y solicitado escuchar las cintas que recogían las diferentes intervenciones.

Antonio Garrigues, en sus palabras introductorias, vino a decir que el juego político ya tiene sus nombres, sus circunstancias y sus

reglas, pero lo que está por decidir es el sistema económico español, y éste, en su opinión, lo van a forjar, fundamentalmente, el Gobierno, las agrupaciones empresariales y las centrales sindicales. El presidente de la APD pidió claridad y concreción al Gobierno —“si va a haber reforma fiscal, que haya reforma fiscal”—; constató que la clase empresarial está convencida de que la época del ordeno y mando ha desaparecido y que es preciso llegar a un consenso, a un entendimiento a corto y a medio plazo, con pacto o sin pacto social; reconociendo, por último, que las centrales sindicales habían luchado por la democracia con paciencia y eficacia y eran una clave decisiva en la viabilidad de cualquier programa económico. Posteriormente, sólo hablarían los representantes de los sindicatos, cuestión que suscitó alguna reserva por parte de un empresario, pero no hubiera sido posible la intervención de sus mil y pico colegas en aquellas circunstancias. Esta vez los patronos no tuvieron más remedio que callarse y escuchar lo que

decían los representantes de los trabajadores.

En la media hora que habló cada una de las centrales, los puntos de coincidencia sobre la situación política, económica y social fueron muchos, si bien se observaron algunos matices diferenciados. Todos coincidieron en que las elecciones del día 15 y el proceso democrático en curso eran factores altamente positivos para los trabajadores y la libertad sindical; que no existía ninguna intención, por parte de nadie, de cerrar los ojos ante la gravedad de la crisis económica, pues se era consciente de que ésta podía terminar desestabilizando la situación política y favorecer así a los posibles factores de involuciones antidemocráticas. Las centrales sindicales, pues, manifestaron su voluntad de contribuir a la consolidación de la democracia naciente siempre y cuando no se pretendiera hacer sobre las espaldas de los trabajadores, pues entonces no habría consolidación por mucha voluntad que pusieran las centrales. En el diagnóstico de la crisis económica

ya no hay grandes misterios, los datos de los sindicatos coinciden incluso con los facilitados por el propio ministro de Economía en su reciente aparición en la televisión: un millón de parados, una inflación del 30 por 100, un déficit de la balanza de pagos alrededor de los 5.000 millones de dólares. Pero si el diagnóstico es el mismo, está por ver si se puede llegar a un acuerdo sobre los remedios a aplicar a corto y medio plazo. Tanto USO como UGT y CC. OO. rechazaron claramente cualquier hipótesis de pacto social —los argumentos son bien conocidos—, pero manifestaron con igual nitidez su disponibilidad a dialogar, negociar y en su caso concluir un acuerdo marco, macroconvenio o como quiera llamarse con la parte empresarial y, eventualmente, con el Gobierno sobre la política económica a seguir.

En el transcurso de la reunión del hotel Palace se desconocían las propuestas del Gobierno en este terreno. Ni su programa económico ni sus intenciones respecto a una negociación del mismo.



Empresarios grandes, medianos y pequeños y dirigentes sindicales: un primer encuentro de tanteo.

Posteriormente, el profesor Fuentes Quintana ha apuntado, en nombre del Gobierno, que esta semana habrá programa económico y que a partir de ahí se iniciarán las negociaciones y transacciones con los grupos y partidos. Se abre así la posibilidad de que no se trate, esta vez, de un nuevo paquete de decretos unilateralmente dictados desde el poder, sino que se intente una negociación y un consenso entre las fuerzas implicadas. Las centrales obreras fueron, en este sentido, ampliamente explícitas: nada de planes de austeridad o estabilización al estilo clásico, con devaluaciones y congelaciones de salarios que aumentarían el paro y reducirían la capacidad adquisitiva de las capas populares. Por el contrario, aumento sustancial de los salarios más bajos y las pensiones, enérgicas medidas contra la desocupación y seguro de paro suficiente, inversiones en equipamientos sociales, reforma fiscal profunda, protección del agricultor y de la pesca, control de la Seguridad Social y mayor participación del Estado en la misma; en una palabra, una nueva política económica que sanee y reactive el proceso productivo, sin parches coyunturales, sino atajando los males de fondo. Ante esta perspectiva, los sindicatos son conscientes de que la negociación va a ser dura y compleja, pues mientras unos hablan de primero atajar la inflación, luego absorber el paro, pacto social, austeridad, etcétera, las posiciones, de momento por lo menos, aparecen bastante alejadas. Un aspecto que resaltó bastante en la exposición sindical fue su sensibilidad ante los problemas de la pequeña y mediana empresa, llegándose incluso a plantear una presión común sobre el Gobierno acerca de los créditos y la Seguridad Social.

Otro gran capítulo del encuentro se centró alrededor de los problemas que plantea la nueva legalidad en las empresas. Aquí los matices diferenciadores aparecieron en las posiciones de unos y otros. Todos los sindicatos están de acuerdo en que se celebren elecciones sindicales libres dentro de los próximos meses —más o menos en el otoño— a unos organismos —consejos o comités— que representen a todos los trabajadores, afiliados o no, y que tengan capacidad de negociar los convenios de empresa. Pero mientras la UGT apuntó la posibilidad de un "acuerdo entre caballeros" entre las centrales con la parte empresarial con el fin de ir a unas elecciones que podrían tener la vigencia de un año y que fueran las Cortes y no el Gobierno las que regularan, posteriormente, esta materia, CC. OO. y USO más bien se inclinaban por unas elecciones —sin provisionalidad—, so-

bre la base de una regulación concertada entre el Gobierno y las centrales sindicales. También para UGT los interlocutores de la negociación fuera del marco de la empresa debían ser únicamente las centrales, mientras que CC. OO. preveía una fase de transición en la que podían darse fórmulas mixtas —delegados elegidos en asamblea y sindicatos— sin renunciar a que en el futuro estos consejos o comités pudieran salir del marco de las empresas. En cuanto a la forma de elección de estos organismos —candidaturas, papeletas, urnas, voto secreto, etcétera— no se manifestaron discrepancias. De la misma manera, todas las centrales reivindicaron los derechos sindicales que componen el contenido de la libertad sindical: asamblea, propaganda, tiempo libre para la actividad sindical, etcétera. Tanto USO como CC. OO. propusieron un estatuto o código de los derechos de los trabajadores que diera consistencia a las reivindicaciones de éstos. Los empresarios mostraron su interés por conocer la opinión de los sindicatos acerca de los piquetes de huelga y el "lock-out". Los piquetes eran válidos como expresión de los comités o consejos, controlados y con actuación pacífica; el cierre patronal no era lícito, pues a diferencia del derecho de huelga atentaría contra la libertad del trabajo. Por lo menos está era la opinión de los tres sindicatos interrogados.

El encuentro en realidad ha sido un primer tanteo cara a unas relaciones que a partir de ahora tendrán que ser necesariamente más fluidas y directas, una vez desaparecidos los intermediarios verticalistas de antaño. Los empresarios, en un proceso rapidísimo, han creado una sola confederación patronal, mientras las centrales obreras siguen pluralmente organizadas y en fase de competencia afiliativa. Los empresarios tenían curiosidad por conocer la posición de cada sindicato ante el problema de la unidad. Pudieron comprobar que las diferencias en este terreno son considerables. En todo caso ante la pregunta repetida de ¿qué sucederá en una empresa si las diferentes centrales no se ponen de acuerdo?, la respuesta común fue: será el consejo o comité de empresa quien negocie y decida y en última instancia la asamblea de trabajadores. La unidad orgánica se ve, de momento, inviable por parte de UGT, mientras CC. OO. y USO serían partidarias de realizarla cuanto antes. Todos coinciden en la unidad de acción y pronto habrá ocasión de comprobar si esto es así, pues ya se ha hablado de un frente sindical ante la crisis o al menos un planteamiento común. ■ S.



Los eurocomunistas, en Madrid.

Eurocomunismo

URSS PCE, SEGUNDA PARTE

JUAN ALDEBARAN

Tiempos Nuevos publica un segundo artículo acerca del secretario general del PCE, don Santiago Carrillo, explicando que disocia la personalidad de éste y sus doctrinas como autor de un libro sobre "Eurocomunismo" del Partido Comunista Español, y de cualquier otro partido comunista europeo. "L'Humanité", de París —órgano del PCF—, ataca a su vez al articulista soviético: "El autor del artículo de 'Tiempos Nuevos' agrava su caso buscando disociar de un partido a su secretario general. Es un procedimiento inadmisibles. Pero no todo es sencillo. En Francia, en Italia, el tema se discute. Los partidos comunistas mantienen unas ciertas distancias con el partido español en este caso. Los partidos socialistas, a su vez, adoptan posturas diversas.

El partido francés, por ejemplo, ha lanzado un aparente exabrupto por boca de su secretario general, Mitterrand, quien declara que, finalmente, todos los comunistas son iguales y persiguen los mismos fines, declaración que resultaría idéntica a la emitida por la gran derecha internacional si no tuviera otras intenciones: la "salvación" del espacio político socialista. Mitterrand, en un país donde la disputa entre los dos grandes partidos de la izquierda obrera, dentro los dos de un programa común, se centra sobre todo en la conquista de un electorado no revolucionario, la SFIO —Partido Socialista— teme que el proceso comunista entre en la conquista de sus clientes. En Italia, en cambio, el Partido Socialista se manifiesta generalmente entusiasta de Carrillo en cuanto le sirve para denunciar las "ambigüedades y contradicciones" del PCI. Las cuales se explican por sus "alas", y por la inquietud que tiene la dirección de ver una ruptura entre los que podrían llamarse prosoviéticos —o simplemente comunistas clásicos— y los eurocomunistas, que ahora dirigen el partido —Berlinguer— no sin ciertas reservas. Mientras los socialistas franceses tienen ya una alianza con los comunistas, de carácter electoral, y tratan de deslindar dentro de ella su propio campo, los socialistas italianos tratarían de forzar la ruptura de sus compatriotas comunistas y ofrecer un entendimiento a los "euros" si logran desprenderse de los clásicos. La ofensiva la lleva la nueva figura del socialismo, Bettino Craxi. (El socialismo español se mantiene más bien prudente y distante.)

Marchais y Berlinguer procuran alejarse del epicentro, del drama. Preferirían que la polémica se centralizase en el partido español, pero se les obliga a definirse. No es una definición fácil. El cual partido español procura implicarles lo más posible, como lo hace Manuel Azcárate —que lleva las relaciones exteriores del PCE— en sus declaraciones a "Paese Sera", en las que explica —además de negar valor marxista crítico a los artículos de la publicación soviética— que los ataques están dirigidos también a los partidos de Francia y de Italia.

Al mismo tiempo, la polémica prende en países de régimen comunista, con la prudencia necesaria. Si Polonia (Gierek) busca una neutralidad, que sería la asunción por el partido polaco de "las posiciones de nuestros camaradas del Este y del Oeste", Alemania Democrática y Bulgaria se alinean con la URSS, como corresponde a sus posiciones duras, y lo mismo hace la línea actual checoslovaca. Yugoslavia, por su parte, apoya el eurocomunismo. ■